

La vacilante economía política de Uribe*

**Aumento de la tributación dual de
clases, acuerdos bilaterales comerciales
dilatados o prolongados,
y la creciente inestabilidad****

Por James J. Brittain***

* Artículo recibido en marzo de 2007

Artículo aprobado en abril de 2007

** Traducción de Pauline Castro.

*** Instructo del Departamento de Sociología de la Universidad de New Brunswick, Canadá,
james.brittain@unb.ca

Introducción¹

Antes y durante el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), en repetidas veces se le aseveró a los electores colombianos que una disminución del conflicto interno que padece el país, y en particular una reducción en la capacidad hegemónica y militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), se alcanzarían durante su gobierno. Las promesas claramente no se han tornado en realidad, si se tiene en cuenta que durante los últimos años puede apreciarse una escalada en las acciones de las Farc-EP contra el Estado y por igual contra fuerzas paramilitares, una escalada armada que equivale a que durante el periodo 2005-2006 haya tenido lugar una de las ofensivas más constantes y poderosas de la guerrilla de la última década (Fundación Seguridad y Democracia, 2004). Al centrar

¹ Siguiendo los eventos del 11 de septiembre de 2001, el Estado colombiano y la administración Bush empezaron discusiones concernientes a una campaña aliada para escalar las prácticas contra la insurgencia en Colombia, sin embargo, expandir la guerra fundamentados en el terror, tal como se hizo en el Medio Oriente, para incluir a las Farc-EP (Leech, 2004a). En octubre de 2002, los informes evidenciaban que los marines de Estados Unidos tenían orden de aumentar las actividades contra insurgencia en el campo colombiano contra las Farc-EP (Gorman, 2002). Fue durante este dinámico periodo cuando formalmente se inicio el Plan Patriota.

la atención sobre la incapacidad militar del gobierno de Uribe para lidiar con las Farc-EP, involuntariamente se ha relegado a un segundo plano el análisis de los complejos dilemas de la actual reestructuración política y económica de este país andino. Las notas siguientes intentan arrojar una luz sobre las complejidades y dificultades que se están avecinando en el segundo periodo de gobierno del presidente Uribe (2006-2010), al lograr su reelección para un segundo mandato de cuatro años, y que ponen en entredicho y cuestionan no solo la estabilidad política del gobierno actual, sino por igual el tradicional trajinar político de Colombia.

Contextualización de la incapacidad de Uribe para responder a las Farc-EP

Previo a su arribo al poder, Andrés Pastrana (1998-2002), un candidato presidencial no muy persuadido de comprometerse con tal estrategia, basó gran parte de su campaña electoral en su expresa intención de buscar una solución negociada con las Farc-EP, como el instrumento central para hacer realidad la pacificación de la nación colombiana, una nación enfrentada de tiempo atrás en una guerra civil (Lemus, 2005, 106; O’Shaughnessy, 2005, 43 y Leech, 2002c, 4). Mientras muchos veían la estrategia de la negociación como problemática –en razón a que mientras Pastrana promocionaba la paz, el gobierno se preparaba por igual para la guerra diseñando y negociando el denominado Plan Colombia, (Richani, 2005b y Cislac, 2001) – cabalgando sobre la promesa de la negociación Pastrana encontró albergue en la Casa de Nariño a la que llegó como Presidente electo de los colombianos (Ruiz, 2001). Ante el fracaso del intento de Andrés Pastrana por encontrar la paz, Uribe centró su campaña electoral como candidato a la dirección del Estado (durante las elecciones presidenciales subsiguientes para elegir al sucesor de Pastrana) en aplicar una estrategia completamente opuesta y diferente a la fracasada del acuerdo negociado consistente en buscar el aniquilamiento directo y coactivo de las Farc-EP (O’Shaughnessy and Bradford, 2005, 54; Lemus, Stanton and Walsh, 2005, 111; Leech, 2002c, 74 y Randall, 2002).

A lo largo y ancho del país Uribe proclamó que en los cuatro años de su gobierno eliminaría la guerrilla del país, promesa que fuera apoyada y avalada no solo por las clases dominantes de los centros urbanos sino también por las élites en la periferia rural (Avilés, 2006, 123 y Richani, 2005b, 93).

Literalmente, a los pocos días de su llegada a la Presidencia de la República en el 2002, Uribe estableció de inmediato controles del Estado en la zona de distensión de las Farc-EP, zona para entonces bajo su dominio, y políticas de control que fueron implementadas rápidamente y que se concretaban en la constitución de un gran ejército de soldados campesinos, la creación de una red de informantes en diversos segmentos de la geografía nacional, en el establecimiento de un control militar en regiones específicas del país y en las controvertidas zonas de Rehabilitación y Consolidación en secciones del nororiente y sur occidente del territorio. (Crandall, 2005, 117; Lemus, Stanton and Walsh, 2005, 111-112; Sweig y McCarthy, 2005, 23-24; Bland, 2004, 5-6; Helweg-Larson, 2002; Leech, 2002a y Leech, 2002b). La intención de tales medidas era elevar las acciones de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas, acciones ya para entonces en marcha dentro del marco militarista del Plan Colombia, tal como fuera adoptado por Pastrana. Durante su periodo entonces como gobernador de Antioquia (1995-1997), Uribe recurrió a métodos similares pero a escala regional. En los años en que se desempeñara como gobernador Álvaro Uribe promovió fuertemente la creación y legalización de las fuerzas civiles-militares (Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, conocidas popularmente como las Convivir), para combatir la guerrilla, antes de que las Convivir fueran declaradas ilegales en 1999 por el gobierno central en gran medida por sus estrechos vínculos con los paramilitares y por hallárseles involucradas en la masacres de civiles. El modelo Convivir funcionó bastante bien en varias áreas del noreste colombiano en lo que al deterioro de la hegemonía de las Farc-EP se refiere, (Sweig y McCarthy, 2005, 19; Livingstone, 2003, 26; Dale, 2003, 71-72; Leech, 2002c, 88 y Richani, 2002, 52, 144).

A pesar de que tales medidas reaccionarias en la escala regional durante los años noventa parecían ser efectivas, Uribe pronto se percató que las Farc-EP eran más poderosas a lo largo y ancho de la nación de lo que él había podido avizorar. A resultas de la inhabilidad del Plan Colombia para responder a las Farc-EP¹, el Estado colombiano estableció una campaña militar directa y acentuada para enfrentar a los insurgentes (Mondragón, 2007, 42-45). A comienzos del 2003, esta degradada nueva estrategia anti-insurgente organizada a través del Plan Patriota, se focalizó ampliamente en los siguientes departamentos del sur de Colombia: Putumayo, Caquetá, Meta y Nariño. En un año, la campaña que había sido acordada entre Estados Unidos y Colombia había logrado un crecimiento sin precedentes en los embates del Estado contra las Farc-EP. Durante este periodo el número de ataques militares iniciados por la guerrilla aumento en un 73% con relación al número de campañas realizadas durante el 2002, (Richani, 2005b, 89, 95).

Inmediatamente comienzan a proliferar informes que anuncian cómo el Plan Patriota ha empezado a “diezmar” a la guerrilla (Acosta, 2004). Se publican declaraciones asegurando que las fuerzas de Colombia y E.U.A. estaban ganando la ofensiva contra las Farc-EP y que existía un debilitamiento del apoyo social del que hasta aquellos meses había disfrutado la guerrilla, a más de una disminución en sus nuevos reclutamientos y la significativa retirada de sus combatientes de reductos socio geográficos en los que previamente habían sido fuertes (Crawley, 2005; Garamore, 2005 y Toro, 2004). Más aún, se transcribían declaraciones de oficiales de E.U.A. manifestando que las Farc-EP “han sido degradadas significativamente” y de que ahora “ya no existe un solo lugar en el país al que no puedan entrar los ejércitos colombianos” (Garamore, 2005). Durante la primavera del 2005 la promesa electoral de Uribe parecía fructificar, y en especial cuando el general de la Fuerza Aérea estadounidense Richard B. Myers públicamente se refirió al Plan Patriota como un éxito irrefutable en el sendero de la inminente derrota de las Farc-EP (ibíd.).

Con informes diarios del gobierno propalando las noticias de la efectividad del Plan Patriota y el desembozado y persistente mensaje de Uribe sobre la certeza de la victoria sobre las Farc-EP, en el papel –y en el campo de batalla– los

números revelaban una situación bien diferente. Alfredo Rangel Suárez, uno de los analistas militares más respetados, y en el pasado uno de los asesores en temas de defensa de Uribe, documentó con cifras como durante los dos años del período de Uribe, las Farc-EP habían realizado el mismo número de ataques contra las fuerzas del Estado que los iniciados durante todo el gobierno del anterior presidente Andrés Pastrana (Fundación Seguridad & Democracia, 2004). Aportando evidencias adicionales en el mismo sentido, aparecen otros trabajos de académicos que estudian la guerra al interior de Colombia y que corroboran las conclusiones de Rangel. Russell Crandall anota que en el 2003 los ataques de las Farc-EP aumentaron en un 23% (Crandall, 2005, 177), mientras Constanza Vieira asegura que durante el año 2004 los ataques de la guerrilla a la infraestructura del Estado aumentaron entre 101 y 106 %, con un 21% correspondiendo a ataques a oleoductos, en especial en el sur de Colombia (Fundación Seguridad y Democracia, 2006 y Vieira, 2006). Cabe anotar que las campañas iniciadas por las Farc-EP no decrecieron y si más bien aumentaron durante el primer periodo de Uribe, “de 227% entre 1998 y 2002 a 450% por año entre el 2003 y 2004”, mientras los ataques militares que partieron del Estado decrecieron en un 22% entre el 2002 y el 2004” (Richani, 2005b, 95). Estas cifras demuestran a las claras, que contrario a las cuentas exhibidas por el Estado, las Farc-EP pusieron a la defensiva a las Fuerzas Militares de la nación en numerosos departamentos, y más significativo aún, en aquellas áreas en las que el Plan Patriota se encontraba activo, demostrando tajantemente que la insurgencia se hallaba lejos de haber sido debilitada. A lo largo de los pasados dieciocho meses, la guerrilla ha desplegado una consistente ofensiva militar en varias regiones del país, que se manifiesta en un número sin precedentes de ataques contra el Estado (Restrepo y Spagat, 2004). Sin embargo, no ha sido solamente con sus campañas militares como las Farc-EP han demostrado su poderío (Leech, 2006b).

Después de adelantar una investigación en el centro y sur occidente de Colombia, durante los años de 2004 a 2006, resultó evidente que las Farc-EP habían aumentado el tamaño de sus fuerzas de combate, en contradicción con los informes divulgados por los medios privados de comunicación y por el mismo gobierno. En tan solo un mes, las Farc-EP habían reclutado y entrenado

100 nuevos combatientes solamente en tan solo uno de los 1050 municipios de Colombia. Durante una entrevista a Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las Farc-EP, el guerrillero afirmó: “observe, mire alrededor, aquí estamos. ¿Ve usted tropas? El Plan Patriota no ha diezmado a las Farc-EP. Nosotros nos movemos libremente por la región tal como lo hemos hecho durante muchos años.” Basado en esa información Mark Eric Williams (2005, 160-161), asegura que Uribe ha fracasado notoriamente en establecer su legítima autoridad como jefe de Estado en gran parte del país. Existen además otros hechos, que no se fundamentan en la capacidad militar de las Farc-EP, pero que han demostrado la incapacidad de Uribe para enfrentar la guerrilla y prevalecer en esta guerra civil. Tales comportamientos tienen que ver menos con los esfuerzos de las Farc-EP por establecer una revolución socialista en Colombia y están relacionados sobre todo con las desiguales condiciones sociales y con las crecientes restricciones económicas impuestas por Uribe a la población colombiana. Las páginas que siguen escrutan estos dilemas intentando ilustrar como tales condiciones, en combinación con la ofensiva militar de las Farc-EP y su consiguiente crecimiento, poseen el potencial para desestabilizar la economía política de Colombia.

La amenaza (potencial) de dos formas de oposición de clases contra el Estado

Las tensiones entre la clase trabajadora y las poblaciones vinculadas con el agro con el Estado distan mucho de ser nuevas en Colombia. Fricciones de esta índole han sido ampliamente relevantes durante décadas en el país y pueden apreciarse con facilidad en la gran abstención de los ciudadanos en las periódicas convocatorias electorales². Tampoco ha sido una ocurrencia insólita

² En 1991, el Estado de Colombia no logró que un 74% de los votantes se acercara a las urnas durante las elecciones para la Asamblea Constituyente (Avilés, 2006, 157). Los porcentajes de abstención han permanecido prácticamente inalterados tal como se pudo observar durante las elecciones presidenciales del 2002 cuando el 60% del país se rehusó a votar. (Murillo y Rey, 2004, 174). La zona rural mostró aún un mayor abstencionismo en el proceso electoral tradicional cuando entre un 80% y un 95% de la población boicoteó las elecciones, mientras que otras áreas rurales presentaron una abstención total del 100% (Dudley, 2004, 220; Coghlan, 2004, 24, 212 y Petras y Brescia, 2000, 139).

que los marginados económicos de Colombia hayan tenido relaciones antagónicas con el gobierno, pero si es sorprendente ahora que nuevos tipos de oposición hayan surgido en distintos segmentos de la clase dominante en Colombia. Estas querrelas sobre las políticas propuestas o adoptadas por la administración de Uribe, tienen el potencial de agudizar la oposición hacia el Estado por parte de la elite tradicional colombiana, seguida por las de las clases de trabajadores urbanos y rurales. Como Uribe poco toca estos temas, los antagonismos pueden aumentar la inestabilidad y ella ser capitalizada por la izquierda revolucionaria y terminar así dando origen a otra tendencia geopolítica en la región latinoamericana, como las de Venezuela, Bolivia, etc., países que en años pasados han experimentado cambios políticos y económicos significativos.

Privilegios desproporcionados en los impuestos establecidos y la creciente protestas de la elite

Empezando por la administración Betancur (1982-1986) y continuando en el tiempo hasta el presente gobierno, el neoliberalismo ha permeado y teñido la política económica colombiana (Avilés, 2006). Sin embargo, los cambios más significativos en este terreno adoptados por el Estado han sido, en los últimos cinco años, los referentes a la tributación de las corporaciones privadas, unas corporaciones favorecidas por una política pública en extremo benigna a sus intereses (Leech, 2006a, 147-151). No deja de ser irónico que en razón a sus políticas neoliberales Uribe merma notoriamente el porcentaje de los recaudos fiscales del Estado que tributan las corporaciones nacionales y extranjeras, en particular gravámenes sobre los ingresos brutos industriales primarios y en consecuencia, a la larga, dispone de menos capital para cubrir el accionar militar en la guerra civil (Leech, 2005; Richani, 2005a, 115 y Richani, 2005b, 89-90, 101).

Un ejemplo bien ilustrativo de esta política se puede apreciar en las modificaciones a los antes lucrativos “impuestos de guerra”, establecidos hace 15 años para apoyar fiscalmente al Estado en su guerra contra los insurgentes

izquierdistas. Adoptados el 11 de febrero de 1991 mediante el Decreto 416, el Estado establecía “impuestos de guerra” que le permitían obtener recursos fiscales de “las exportaciones petróleo, gas, carbón y níquel y de las llamadas telefónicas internacionales” y un gravamen del 5% a aquellos contribuyentes que ganaban más de un millón de pesos al año (Avilés, 2006, 157). Sin embargo, y más concretamente, el impuesto se dirigía a grabar la producción de hidrocarburos. Fue diseñado para apuntalar la capacidad fiscal requerida para contrarrestar el creciente poderío bélico de las Farc-EP y de otros movimientos sociopolíticos insurgentes de izquierda. Entonces, el Estado colombiano adoptó medidas que le permitiesen crecer sus fondos, haciendo uso de su recurso natural más productivo e instituyó para cada barril de petróleo colocado en el mercado un “impuesto de guerra” de \$1-\$1.50 dólares (Renner, 2002, 38). Mas sin embargo, mientras el nuevo tributo de guerra le rendía millones de dólares al Estado colombiano que se enrutaban (como se acaba de afirmar) al programa de contrainsurgencia, en el 2001 muchas, si no todas las MNC (Corporaciones Multinacionales, por sus siglas en inglés) del sector energético se unieron y emprendieron una oposición conjunta a la política fiscal del gobierno argumentando que el alza en los impuestos deterioraba el comercio, mermaba la inversión privada y menguaba sus ganancias (Richani, 2005a, 116). Como resultado inmediato, por una parte, de la pertinaz adopción de políticas económicas neoliberales y por la otra de políticas nacionales que han reducido el control público sobre el comportamiento de las corporaciones multinacionales, el gobierno pronto claudicó en su “guerra fiscal” contra las corporaciones (ibíd., 128). Los últimos cuatro (4) años testimonian el mantenimiento de esta tendencia que estrecha progresivamente la gama de fuentes fiscales para abastecer los cofres del Estado y por ende para combatir la guerrilla (Leech, 2005).

Al no ceder la amenaza de las Farc-EP el Estado ha tenido que, paradójicamente, inventarse otras fuentes de recaudo para sostener el combate contra las fuerzas insurgentes³. Una de las soluciones del gobierno de Uribe ante la disminución

³ Dentro del marco del Plan Colombia, el Estado colombiano gastó, en promedio \$7.3 millones de dólares diarios para combatir a las Farc-EP, una cantidad que un país endeudado enormemente no puede darse el lujo de sostener. (Latin American Press, 2004)

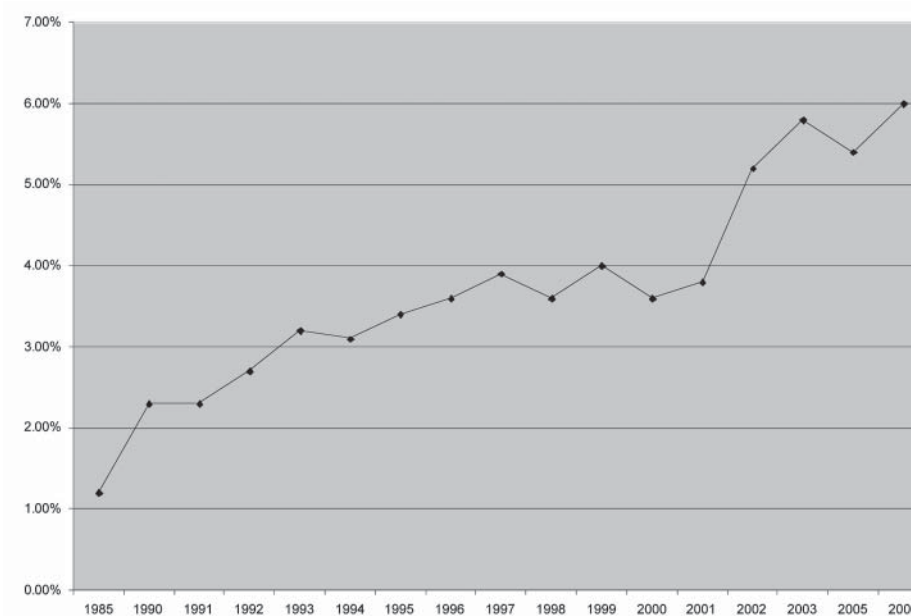
de su capacidad fiscal, ha sido apoyarse aún más en la riqueza y el ingreso de las elites económicas de la nación⁴. Durante el primer año del gobierno Uribe, la clase dominante de Colombia digirió un incremento del 20% en impuestos a la renta (Muse, 2004, 22-23). Paso seguido, el Estado decretó un impuesto adicional, por una vez, de 1,2% sobre los activos líquidos, para aumentar las acciones de las fuerzas militares colombianas en su empeño de restaurar la seguridad y el orden en el país (Daily Journal, 2006). En su momento este segmento de la población apoyó las medidas que perseguían a toda costa preservar la seguridad de los centros urbanos de las arremetidas de las Farc-EP y expresó su acuerdo con un sí a la política de impuestos de Uribe. Sin embargo, las cargas fiscales endilgadas a las elites con carácter transitorio no han sido eliminadas, tal como se les prometiera en un principio, y por el contrario han permanecido vigentes durante los cuatro años últimos. El haber optado por estas alternativas fiscales le ha servido a muchos académicos para ilustrar como el estrato socioeconómico más alto de Colombia ha cargado en forma desproporcionada con la casi totalidad de los costos de la guerra civil y que para este 1,7% de la población colombiana su esfuerzo tributario es, a no dudarlo, injusto mientras la gran mayoría de la población se beneficia de la seguridad militar lograda, sin aportar la que debería ser su contribución correspondiente (Crandall, 2005, 177; Sweig y McCarthy, 2005, 22 y Richani, 2005b, 90). Debido a esta carga fiscal, en los últimos años se evidencia un aumento en la oposición de la clase dirigente al gobierno.

En la primavera del 2006 Uribe esbozó una nueva propuesta para instituir otro impuesto adicional por “una sola vez” para con ello expandir los gastos en defensa. Uribe expresó su repudio a las murmuraciones de la elite social y afirmó: “nosotros debemos considerar que los sectores más ricos de la sociedad realicen una contribución por una vez para proveer el dinero para tecnología militar y transporte”⁵. Un tanto después, en julio del mismo año, el Estado, y sin parar en mientes a la creciente oposición, anuncio que un nuevo impuesto,

cuyo peso recaería mayormente en la elite económica, sería presentado al Congreso de la República. La reforma tributaria buscaba alimentar las arcas de los militares con \$1.2 billones de pesos extras mediante un gravamen con una tasa muy baja sobre los activos financieros superiores al millón de dólares (*People's Daily*, 2006).

El aumento de impuestos sobre la clase dominante en Colombia puso a Uribe en una situación comprometedor y difícil porque esa clase se interpreta a sí misma como su aliado político y económico. El dilema enfrentado por Uribe

Gráfico 1: Gastos militares en Colombia como porcentaje del PIB (Administración Uribe 2002-2006)



Fuente: Avilés (2006, 84); Bloomberg (2005); Bureau of Western Hemisphere Affairs (2005); Richani (2005b, 94); Sipri Military Expenditure Database (2005); Committee of Government Reform (2004); United States Embassy of Colombia (2003); World Bank (2002); Federal Research Division Library of Congress (1988).

⁵. Tal como lo señala Reuters (2006a).

⁴. Se debe anotar que los impuestos para la elite no se iniciaron con Uribe. Durante el gobierno de Samper (1994-1998), los sectores ricos de Colombia se vieron obligados a pagar bonos de guerra con el fin de obtener específicamente \$421 millones de dólares para la Policía y para las operaciones militares (Avilés, 2006, 83). Si bien en el gobierno de Uribe el gasto militar ha sido mucho mayor que en los gobiernos de las dos pasadas décadas (ver Gráfico 1).

en lo concerniente a las presiones económicas sobre las elites sociales gira sobre la disyuntiva de si debe o no “la elite colombiana continuar haciendo los sacrificios económicos, mediante el pago del impuesto por una vez para cubrir los gastos de defensa y al mismo tiempo soportar los gravámenes destinados al financiamiento de la inversión social” (Sweig y McCarthy, 2005, 26). Su descontento ha persuadido al gobierno para mantener algunos impuestos que gravan su riqueza y sus ingresos mientras, paralelamente, se dan las trazas para dar con otras fuentes de recursos que no la afecten. Una de ellas es extender la responsabilidad tributaria a grupos más amplios del espectro socio-económico de la población colombiana.

Acentuación del resentimiento de la clase trabajadora por el aumento de impuestos domésticos

Mientras los párrafos precedentes ponen de presente las presiones fiscales que circundan a la elite, en otros círculos, por el contrario, se arguye cada vez con más frecuencia, que los impuestos que tienen que pagar los ricos sin duda lograrán traspasárselos a la clase trabajadora y a la población rural las cuales en último término terminarán pagándolos (Leech, 2006c y Martínez, 2006). Algunos estudiosos del tema fiscal afirman que se ha enfatizado en demasía la carga tributaria que gravita sobre la elite (Sweig y McCarthy, 2005, 25-26), y que para comenzar, quienes tal cosa afirman no establecen el *por qué* una minoría soporta tal desproporción en los impuestos⁶. Los críticos van más allá y sostienen que la razón primordial para que muchos colombianos no paguen directamente contribuciones fiscales estriba, precisamente, en que Colombia tiene una de las distribuciones de ingreso más concentradas de todo el hemisferio occidental (Avilés, 2006, 24,91; Díaz-Callejas, 2005; Ramírez, 2005, 83; Rojas, 2005, 210; Coghlan, 2004, 153; Comisión Colombiana de Juristas, 2004; Contraloría General de la República, 2004, 43-44; Murillo y Rey, 2004, 38; UNDP, 2003, 42 y Korzeniewicz y Smith, 2000, 10-11). La

⁶. Entrevista entre el autor y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro y con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, 16 y 17 de agosto de 2006.

gran mayoría de la población (entre 65 y 69 % en los centros urbanos y entre 83 y 87 % en el área rural) es pobre y en consecuencia el empleo legítimo –la base de donde se puede recaudar el impuesto a los ingresos– es cualquier otra cosa menos que abundante. Así mismo, innumerables académicos han recalcado que por décadas la gran parte de las tierras cultivables de Colombia se concentran en manos de unos pocos propietarios rurales. Bajo estas condiciones, en consecuencia, no es posible que los productores rurales se transformen en miembros realmente efectivos del modelo capitalista de desarrollo y que, como tales, puedan generar un ingreso estable que a su turno sirva de base para unos recaudos fiscales más abundantes para financiar las obligaciones del Estado (Ahmad, 2006, 60; Avilés, 2006, 24; Taussig, 2004a, 13; Leech, 2002c, 9; Giraldo, 1996, 14; Washington Office on Latin America, 1989, 9, Gerassi, 1965, 154 y Lee, 1957, 204)⁷.

Al hacer caso omiso de los aspectos fundamentales de la desigualdad en el ingreso y de la pésima distribución de la tierra, la administración Uribe ha centrado la discusión del dilema al que se viene haciendo referencia, en una perspectiva exclusivamente económica. Cuando tan solo 740.000 colombianos pagan directamente algún tipo de tributo (Richani, 2005b, 90 y Sweig y McCarthy, 2005, 22), el Estado amplía la base del sistema de impuestos al valor agregado (popularmente conocido por sus siglas en español como IVA) por lo que la totalidad de la población, y no tan solo los ricos, realizan pagos monetarios al Estado al adquirir unos y otros la mayoría de los bienes y servicios que precisan. La racionalidad de esta medida ha sido ampliamente justificada y respaldada por estudiosos del desarrollo económico y por asesores financieros en el extranjero. El analista Fernando Losada, con sede en Nueva York y perteneciente a ABN- AMRO, apoya las medidas propuestas por Uribe y expresa que “si más colombianos empiezan a pagar impuestos, al hacerlo podrían descender los niveles generales de las tarifas fiscales, lo que tendría a su vez un impacto positivo en la competitividad de la economía” (Bronstein, 2006a).

⁷. Irónicamente, el Estado ha permitido a los propietarios de “grandes extensiones de tierras” en casi su totalidad “permanezcan inmunes a los impuestos” (Sweig and McCarty, 2005, 22).

La nueva propuesta de ampliación del IVA busca fijar una tasa del 10% al gasto en alimentos básicos, establece otra tasa del 17% sobre una amplia gama de bienes de consumo y finalmente una tarifa del 25% para artículos tales como vehículos, botes, etc.⁸. Al revisar el crecimiento detectado en la pobreza rural y urbana, un aumento en el IVA sería devastador económicamente para la gran mayoría de habitantes del país y ni que decir para aquellos que dependen del negocio de los alimentos y para los productores del agro (Bronstein, 2006b). De tener Uribe éxito en la aprobación de su reforma a los impuestos, previene Helda Martínez, serían los “trabajadores colombianos quienes verían recortado su poder de compra” y paso seguido la disminución de su capacidad adquisitiva se traduciría en una disminución del gasto de los hogares de productos y servicios surtidos por industrias nacionales (Martínez, 2006).

Tensiones duales de clase

Uno de los ejemplos más ilustrativos de como el IVA aumentaría la carga económica sobre la clase trabajadora, mientras se disminuyen las presiones a la elite, es la reducción esperada en el impuesto formal a la renta de 39% a 32% una vez haya sido aprobada por el Congreso la reforma tributaria. Ha sido ampliamente documentado que el propósito de Uribe, en el caso de la reducción del impuesto a la renta de la elite, es compensar la disminución consecuente en los recaudos del Estado mediante la ampliación del IVA a alimentos básicos consumidos por todos los colombianos, por lo que una gran parte de la carga fiscal se traspasaría entonces a la clase trabajadora (Bronstein, 2006a). Con menos del 2% pagando impuestos a la renta, Uribe espera satisfacer a sus aliados económicos y políticos disminuyendo en un 7% los impuestos gravables a la elite. Sin embargo, al tomar en cuenta el aumento en el impuesto por una vez sobre los activos líquidos de los ricos colombianos (al que se hizo referencia anteriormente) no quedarían muy bien impresionados

⁸ Un aumento dramático a los impuestos afectaría significativamente a los habitantes de las zonas rurales, en donde, debido a la apatía del gobierno carecen aún de infraestructura y en donde aún hoy muchos continúan utilizando el transporte fluvial para vivir, para el comercio y para viajar.

con el limitado alivio fiscal otorgado en lo correspondiente al impuesto a la renta. Algunos comentaristas han ido más allá al contextualizar la reforma tributaria de Uribe como una medida económica que no beneficiaría de ninguna manera a la elite local y más bien favorecería la riqueza de aquellos que residen por fuera del país. Leech arguye que las reformas al IVA en forma simultánea aumentarían las tensiones a los negocios colombianos en la medida que reducen la capacidad de compra de los grupos medios y bajos y *pari passu* aumentan el peso fiscal a la industria doméstica y los capitalistas nacionales (Leech, 2006c).

De nuevo constituye una ironía que, mientras Uribe saca adelante sus propuestas, persiste por otro lado en continuar con la reducción en las tasas fiscales a las multinacionales extranjeras y en los tributos asociados directamente con la inversión. Al hacerlo así, perjudicaría a los actuales y posibles empresarios nacionales y a los industriales y grupos económicos regionales. En la práctica, la reforma tributaria está lejos de otorgar un beneficio real a la gran mayoría de colombianos y en consecuencia favorecería mucho más a los inversionistas de los Estados Unidos. Mientras una gran presión económica y geopolítica ha llevado a que “las naciones suramericanas... dejando de lado el neoliberalismo reclamen el control soberano de sus economías y recursos naturales”, la reforma tributaria de Uribe “ha hecho evidente de nuevo su compromiso de servir a los intereses del capital global a costillas del bienestar de la mayoría de pobres colombianos” (Ibíd.). Ricardo Durán, analista principal de la firma Corredores Asociados, subraya la pertinencia y validez de este argumento remarcando que mientras se confronta un “gran costo político de subir los impuestos... su elevación sería de muy buen recibo en el exterior entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y sin lugar a dudas entre los inversionistas foráneos” (Muse, 2004, 23).

El bilateralismo E.U.A. - Colombia: una plataforma para la revolución rural

La ejecución de la reforma al impuesto IVA propuesta por Uribe afectará dramáticamente los sectores público y privado de las regiones metropolitanas

de Colombia; sin embargo descontentos similares (y protestas) están aflorando en el campo a raíz de nuevas políticas económicas adoptadas por el Estado. En las áreas rurales del país un sinnúmero de empresarios exteriorizan su preocupación ante los nuevos acuerdos bilaterales de comercio y frente a los convenios políticos entre E.U.A. y Colombia, convenios y acuerdos a todas luces adversos a los intereses de pequeños y medianos productores al igual que a los del campesinado. Además, los productores rurales deberán incurrir en mayores erogaciones para transportar sus habituales cosechas al mercado al ampliarse el IVA y serían golpeados por segunda vez al entrar en vigencia el nuevo gravamen del 10% sobre la venta de alimentos, un rubro del gasto familiar antes exento de tributos, disminuyendo sus entradas en un mercado de consumidores con restricciones económicas adicionales⁹. Intentando contrarrestar la desmejora económica de la actividad agrícola, el Estado ha propalado su intención de ayudar a los trabajadores rurales, una ayuda que se originaría a través de los nuevos acuerdos de libre comercio, el TLC, con los Estados Unidos para finales del 2007.

En entrevista concedida en abril del 2006 por Hernando Gómez, a la sazón jefe de la misión negociadora de Colombia para el TLC con los Estados Unidos, y actuando como vocero de la administración Uribe, aseguró que en caso de un derrumbe del sector agrícola el Estado se comprometería a apoyar con exenciones fiscales garantizadas por el Estado y/o mediante programas públicos a aquellos colombianos del área rural que resultasen afectados por los acuerdos comerciales Colombia-E.U.A. Dijo entonces Gómez: “algunas industrias enfrentarán tiempos difíciles por los ajustes, pero el efecto neto sería más trabajos, mayor inversión y mayor crecimiento económico, de no ser así no hubiéramos negociado el tratado”¹⁰. Esperanzado en lograr la pronta aprobación del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (el TLC), Uribe les ofreció garantías a los productores rurales que su gobierno haría

⁹ Esos factores inciden en el consumo doméstico, debido a que en Colombia, es uno de los mayores consumidores de bienes agrícolas producidos domésticamente del hemisferio occidental. Durante los últimos cinco años, productores a menor escala proporcionaron el 42% de los alimentos consumidos en el país (Díaz Montes, 2005).

¹⁰ Citado por Goodman (2006a).

prevalecer “precios más bajos para los insumos empleados en la producción de alimentos, maquinaria que aumentase la productividad de la agricultura, así como abrir la oportunidad para exportar, con altos márgenes de ganancias, productos como mangos y otras frutas exóticas”¹¹. Para rematar, el Estado prometió subsidiar por medio de préstamos a los agricultores, anunciando recursos de crédito por un monto de cerca de \$220 millones de dólares por año, para así anular las tensiones y compensar las posibles pérdidas económicas del campo que pudiesen surgir de las condiciones estipuladas por el TLC¹².

En medio de una tremenda oposición urbana a la reforma al IVA, la administración se hizo a un aliado político cercano en los habitantes de las regiones periféricas del país, prometiéndoles la puesta en marcha de la plataforma de bienestar socioeconómico arriba esbozada. Aparentemente, tras adelantar un balance más riguroso de los costos y el posible alcance de sus promesas públicas, la administración Uribe, paradójicamente, optó y sin mucha publicidad, por recortar el monto del apoyo monetario a los productores rurales que había ofrecido en previsión a los posibles efectos adversos del TLC, en un espectacular 41%. Gloria Inés Cortés, para aquella fecha ministra de hacienda encargada, declaró en la primavera del 2006 frente al Congreso colombiano como no solamente el apoyo ofrecido de los \$220 millones de dólares anuales se habían reducido a \$156 millones, sino que muy posiblemente recortes adicionales de esos fondos podrían ocurrir en meses venideros (*Prensa Latina*, 2006)¹³. A pesar de lo devastadora que resultó semejante noticia para empresarios agrarios y campesinos, dentro de la bucólica Colombia rural rondaba todavía la esperanza de hacer finalmente efectiva la ayuda socioeconómica de las agencias de desarrollo norteamericanas – un componente de la estrategia del Plan Colombia para reducir los cultivos de coca

¹¹ *Ibíd.*

¹² Algunos arguyen respecto al “modelo de subsidios” que es “ínfimo si se compara con los \$17 billones que los productores de Estados Unidos reciben del gobierno” de tal manera que los productores colombianos específicamente los pequeños agricultores, comparativamente tan alejados de políticas proteccionistas de la administración Bush (Goodman, 2006a).

¹³ Para añadir sal a la herida, Uribe está presionando por la reducción en los pagos descentralizados de los 32 departamentos de Colombia (Bronstein, 2006b).

y desestimular el apoyo campesino a las Farc-EP— a favor del agro nacional. Y sin embargo, en el otoño de 2006 los Estados Unidos y la administración Uribe emitieron otra declaración política, por igual incomprensible a todas luces, que acabó con lo que había podido ser el respaldo del sector rural al Estado. Sin duda la decisión es uno de los más sorprendentes rasgos de la estrategia bilateral, no solamente en lo concerniente a la industria de la coca sino en cuanto al sustento social con que cuentan las Farc-EP; pero las administraciones Bush y Uribe adoptaron medidas que de seguro alterarán el panorama socioeconómico y político de Colombia en los años venideros.

Por medio de una declaración de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en un desprevenido 22 de septiembre del 2006, y dando a entender sin muchos rodeos que las Farc-EP contaban con la capacidad y los recursos necesarios para acciones armadas en la capital del país¹⁴, la Usaid (Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) hizo el más sorprendente anuncio de las pasadas décadas, en lo atinente a la política exterior de ese país con respecto a Colombia (*Reuters*, 22 de septiembre de 2006b). Como es bien conocido, el 50% de las ayudas económicas de los Estados Unidos para América Latina se destinan a Colombia; sin embargo la administración Bush anunciaba en esa fecha

¹⁴. A las cuatro semanas de este aviso, se reportó que las Farc-EP habían atacado en Bogotá instituciones militares secundarias, resultando heridos 23 militares y destrozados seis vehículos. (*Associated Press*, 19 de octubre de 2006 y *CNN International*, 19 de octubre de 2006). Aún sin pruebas suficientes el Vice Presidente Francisco Santos cree que los responsables de las bombas fueron las Farc-EP cuando dijo: “me imagino que esto fue hecho por las Farc. No veo otra alternativa” (*Associated Press*, 19 de octubre de 2006). El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, así como el vicepresidente, dice que las Farc fueron el grupo que orquestó el ataque a las fuerzas militares en la capital. El 19 de octubre del 2006, un carro bomba detonó en el norte de Bogotá a pocos metros de la Universidad Militar Nueva Granada al inicio de una conferencia a la que asistían algunos dignatarios importantes: el general Mario Montoya y Juan Pablo Corlazzoli, un representante de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para la Paz en Colombia. El vicepresidente dijo “la bomba estaba en una Ford Explorer que pasó por todas las trabas de la seguridad de un parqueadero militar. Significa un problema de seguridad en las Fuerzas del Estado”. “Un general pudo haber sido el blanco escogido en un atentado con bomba en Colombia”. Muchos creen que el atentado no solamente iba dirigido a la institución militar sino al general Montoya, de hecho, la bomba destruyó completamente su carro blindado. (*Associated Press*, 19 de octubre de 2006 y *CNN International*, 19 de octubre de 2006).

haber optado por recortar la mayor misión de la Usaid en el hemisferio occidental al suspender toda ayuda económica a varios departamentos del sur de Colombia (Anncol, 2004). Es difícil comprender las intenciones que subyacen tras este cambio, en especial por que es bien sabido que el sur de Colombia es la región más dependiente de la industria de la coca y donde sus habitantes han mantenido un estrecho y solidario apoyo a las Farc-EP por más de treinta largos años. Robert J. Alexander recuerda que hace ya algo así como media centuria, el método más eficaz de los Estados Unidos de Norteamérica para disuadir a los simpatizantes y revolucionarios socialistas de América Latina eran programas socioeconómicos, culturales y políticos, que debilitaban la fuerza del imperativo ideológico o el deseo de quebrantar el capitalismo (Alexander, 1957, 22-23). No deja de ser una ironía más que este lapso de la historia compartida de las complejas relaciones entre estos países pareciese olvidado y relegado a un segundo plano, precisamente por las mismas agencias de desarrollo de los Estados Unidos, y por funcionarios y políticos que personifican la administración de George W. Bush.

Razón capital para clausurar la ayuda socioeconómica de la Usaid al epicentro mismo de la campaña de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas colombianas, es la hegemonía creciente de las Farc-EP en la región y la incapacidad de las fuerzas conjuntas para doblegarlas en el campo de batalla. Las agencias públicas de los Estados Unidos admiten, entre líneas, la superioridad estratégica de la insurgencia armada. La Usaid indirectamente se refiere al poder político-militar de las Farc-EP, dando a entender que este poder rebasa en su accionar los límites de seguridad tolerables para que la agencia y sus empleados laboren diligentemente en las regiones sur del país. Después de casi \$5.000 millones de dólares aportados por el fondo de contrainsurgencia de los Estados Unidos, del despliegue de 20.000 unidades militares entrenadas directamente por norteamericanos y de un prolongado abastecimiento de armas a la tropa, los organismos de Estados Unidos y Colombia no logran debilitar la guerrilla. En consecuencia, por obvios motivos de seguridad, la Usaid prohibió a sus funcionarios continuar con los proyectos que habían sido programados como etapas subsiguientes de su programa para la región. Por igual, la hasta ahora imbatible zozobra reduce las rentabilidades esperadas por

inversionistas privados; empresarios propensos al riesgo se rehúsan a invertir o de plano abandonan las extensas zonas bajo el control de las Farc-EP en el Putumayo, Caquetá, etc. (Goodman, 2006b y Leech, 2004b)¹⁵.

Un examen a vuelo de pájaro del vertiginoso aumento de la producción de coca dice mucho del rotundo fracaso de la Usaid para plasmar un programa alternativo de desarrollo rural y fallar en ofrecer los más elementales incentivos a los campesinos locales y a los pequeños productores para que abandonaran los cultivos ilícitos y adoptaran siembras alternativas legítimas (Goodman, 2006b y Gibbs y Leech, 2005). Basados en este ejemplo palmario del fracaso de las Agencias Internacionales de Desarrollo, enterados del mayor poder hegemónico de las Farc-EP en la mencionada región, y sabedores de que el sur de Colombia tiene los niveles más altos de producción de coca en el país, a pesar de todo ello, dentro del nuevo programa de desarrollo de la Usaid para Colombia que llegaba a los \$350 millones de dólares, la Agencia se negó (como se ha abundado) a continuar la ayuda socioeconómica. (O’Shaughnessy and Bradford, 2005, 32). Al abandonarla, ni la administración de los E.U.A. ni la de Colombia, han hecho la más leve sugerencia de que sus fuerzas de contrainsurgencia consideraran suspender sus acciones en esta porción de la geografía nacional. Los centenares de campesinos, de pequeños y medianos labradores y de cultivadores de coca que la pueblan, han denunciado abiertamente el cambio de política de la Usaid, porque al clausurarse su apoyo, lo que inevitablemente se sigue es exacerbar su ya de por sí elevada dependencia de la coca para su subsistencia mientras expone irremediabilmente a la población civil inerme a la violencia inmisericorde de los conflictos armados.

“No es necesario acotar que una población desilusionada por los engaños, desconfiada de un gobierno que repetidamente la ha abandonado, esté ahora más escéptica que nunca sobre la retórica de Bogotá y de Washington. Como sucintamente lo expresó Mario Cabal del programa Plante: ‘Tenemos plata

¹⁵ Es de anotar que mientras la inversión privada deja el sur de Colombia, Nestle S.A de Colombia con fondos de las Naciones Unidas) ha construido un portafolio que aumentará en el Caquetá la capacidad de productos lácteos en un 100% (Goodman, 2006b).

para helicópteros y para armamentos, pero carecemos de dinero para programas sociales” (Gibbs y Leech, 2005. Ver también Bloomberg, 2006).

En días recientes se ha traído a colación como, a más de haberle dado la espalda a la población rural por parte de la agencias de desarrollo de los Estados Unidos, que como era de esperarse fortalece el cultivo de la coca, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno brega a brazo partido por firmar entre Colombia y los Estados Unidos redundará, por razones similares, en otra vuelta de tuerca que refuerza, si tal cosa todavía cabe, la dependencia de la agricultura colombiana de las siembras prohibidas. Otra generación de jornaleros, que bajo circunstancias más propicias desdeñaría los cultivos ilícitos o aquellos labriegos y colonos que en su momento habían llegado a abandonarlos, es muy posible que se vean abocados a recurrir a la economía de la droga ante la ausencia de estrategias reales de desarrollo rural e incentivos estatales que les abran la opción de enrutarse a otras opciones de vida.

“Los 28.000 arroceros así como los cultivadores de maíz, cerealeros y los propietarios de gallineros, dijeron que el pacto de comercio del TLC los sacará definitivamente del negocio. Esto es que, al igual de los cultivadores en todas partes, muchos luchan por producir en condiciones muy restrictivas, mientras que en los Estados Unidos de América sus contrapartes reciben generosos subsidios del Estado. Para amortiguar su impacto negativo, las barreras arancelarias para productos agrícolas sensitivos se eliminarán gradualmente a lo largo de un periodo de 12 a 19 años. A pesar de todo ello, Colombia deberá importar una cuota de 87.000 toneladas de arroz blanco –que representan cerca del 6% de la producción nacional anual– cuota que ha de aumentarse de ahí en adelante en un 4,5% anual, según lo acordado en un principio. En este corto lapso, una gran cantidad de importaciones baratas pueden fácilmente reducir hasta en un 30% el precio que los agricultores colombianos obtienen en promedio por su arroz en el mercado nacional, dice Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, la asociación colombiana de cultivadores del grano. Pero una mayor preocupación para el gremio es lo que llegase a suceder si finqueros, incapaces de competir en el mercado con importaciones subsidiadas por gobiernos extranjeros, se vuelcan hacia los cultivos ilícitos como la coca o la amapola, el ingrediente básico para

la elaboración de la heroína. En especial, en la región productora de arroz del departamento del Meta, en donde cultivos de coca y arroz son colindantes, ‘si el gobierno no ayuda al agricultor, los traficantes de droga lo harán sin el menor titubeo’, dice Hernández” (Gorman, 2006a).

En pocas palabras, los gobiernos actuales de Estados Unidos de América y de Colombia en vez de buscar nuevos aliados entre los sectores empobrecidos del agro mediante los una y mil veces probados programas socioeconómicos de bienestar, por el contrario han escogido, como lo refleja la naturaleza de los pactos bilaterales económicos y políticos ya firmados y los que se siguen negociando, en arrinconar contra la pared a la población más vulnerable de Colombia.

Un garrote sin zanahoria: medidas que conducen hacia el apoyo rural para una solución revolucionaria

Tantas veces ha sido recalcado que las desfavorables condiciones socioeconómicas de Colombia y una muy dudosa perspectiva de que la nación realice su cambio estructural al interior del sistema, conducen a aumentar el fermento social, ideológico y político de la actividad revolucionaria, que volver a insistir sobre ello es prácticamente caer en un lugar común (Holmes, Gutiérrez y Curtin, 2006, 178; Peceny y Durnan, 2006, 98; Felbab-Brown, 2005, 14, 107 y O’Shaughnessy and Branford, 2005, 7. Ver también Klare, 2001). La realidad de los nuevos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, tipificada en el uso sistemático de los Estados Unidos, en su moderna versión conservadora de política exterior, de un garrote sin zanahoria, en combinación con el impuesto al valor agregado (IVA) del gobierno de Uribe, es una combinación sociopolítica potencialmente favorable a un desusado aumento del apoyo rural popular a la guerrilla, o para que los campesinos vean en las Farc-EP la mejor opción de subsistencia y de seguridad económica y política (Leech, 2006b). El plan de acción adoptado por los EUA y por Colombia para eliminar el cultivo y el procesamiento de la coca ha resultado, en últimas

de término, en un creciente fortalecimiento de la base social de las Farc-EP en estos años que corren (Peceny and Durnan, 2006, 109). Fue un error mayúsculo cometido tanto por la administración de George W. Bush como por la de Álvaro Uribe Vélez hacer reposar su estrategia casi exclusivamente en la solución militar a lo que claramente se ha constituido como un problema ante todo socioeconómico y político. Ambos gobiernos dieron por sentado que restringiendo o eliminando el cultivo de coca se lograría disminuir en forma directamente proporcional la capacidad de las Farc-EP para hacerle la guerra al Estado, cuando en realidad lo que se ha obtenido en últimas de cambio es precisamente lo opuesto.

Una de las razones para el aumento del apoyo popular a la guerrilla en las zonas en donde los dos gobiernos intentan erradicar el cultivo del alcaloide, es enunciada por Holmes, de Piñeres y Curtin al aseverar que simplemente la “falta de oportunidades económicas contribuyen a exacerbar la violencia de la guerrilla de izquierda” (Holmes, Gutiérrez y Curtin, 2006, 178. Ver también Peceny y Durnan, 2006, 98 y O’Shaughnessy and Branford, 2005). Contrario a teorías que aceptan como obvio que el soporte y el poder de la guerrilla reside simple y llanamente en su vinculación con la industria de la coca (Steinberg, 2000, 260-267), los programas de erradicación de narcóticos han fallado no solo en debilitar su capacidad política y militar sino que han reforzado justamente la adhesión de los residentes de las localidades a los objetivos por los que batallan los revolucionarios alzados en armas. Felbab-Brown dice que poner en práctica un sistema de erradicación de cultivos ilícitos, sin antes haber derrotado en la arena militar a las Farc-EP o de haber ejecutado previamente proyectos de desarrollo sostenibles y efectivos, “genera exactamente lo contrario a ganarse los corazones y las voluntades de la gente” (Felbab-Brown, 2005, 107). En la misma línea de razonamiento, otros investigadores académicos aseguran que mayores reducciones en la ayuda social, combinada con los acuerdos bilaterales neoliberales de comercio seguirán, a no dudarlo, aumentando la base social rural, el número de nuevos reclutas en la guerrilla, y reforzando la legitimidad contra-hegemónica de las Farc-EP como movimiento sociopolítico revolucionario (Brittain y Sacouman, 2006 y Leech, 2006b). De allí que este vacío le haya allanado el camino a las Farc-EP

para expandir sus programas sociales pre-revolucionarios; así, quienes parecen ir ganando los corazones y la mente del pueblo campesino son precisamente los guerrilleros (Felbab-Brown, 2005, 107).

Luego de entrevistarse con las Farc-EP en agosto del 2006, Leech cita en su ensayo a un comandante de la guerrilla que le contase que “la fumigación de cultivos afectaba más a la gente que a la guerrilla” (Leech, 2006b). “Ellos (los campesinos) son los más dependientes de la coca para poder sobrevivir” A renglón seguido el guerrillero reconoció que las tácticas gubernamentales contra la coca tan solo están apuntalando el apoyo popular a la guerrilla en las regiones remotas del país. “Estas políticas reaccionarias han permitido a las Farc-EP estar “orgánicamente unidas al campesinado, hecho que el mismo gobierno de Uribe ha pretendido ignorar” bien sea por preservar el apoyo ideológico y político que precisa o bien para sobrevivir social y económicamente” (ibíd.). Y no obstante, esta realidad ha llevado a la población al convencimiento de que las Farc-EP “son claramente un ‘gobierno del pueblo’” (ibíd.)¹⁶

Durante los últimos años es posible apreciar una migración rural en muchas localidades dentro del extenso territorio de las Farc-EP. Por ejemplo, durante las negociaciones de paz entre el Estado y las Farc-EP (1998-2002) nutridos grupos de campesinos, pequeños y medianos productores, personas pertenecientes a naciones indígenas y afro colombianos migraron hacia zonas controladas por las Farc-EP y en especial a San Vicente del Caguán, Caquetá (Felbab-Brown, 2005, 109). En solamente un año y redondeando cifras, 20.000 personas arribaron a Villanueva, territorio de las Farc-EP y epicentro de las negociaciones entonces en progreso. Leech relata como “muchos habitantes de los pueblos de estas comarcas disfrutaban viviendo en el paraíso seguro de los rebeldes” pues les

¹⁶ Las Farc-EP han sido parte importante en el Meta en la construcción sociopolítica de programas desarrollo alternativo, asociados con la población rural (Leech, 2006a, 124 y Leech, 2004a). Leech describe como “como durante los pasados 50 años, sin apoyo del gobierno nacional, los campesinos han creado una red de caminos de tierra en medio de la selva húmeda, transitables solo en vehículos de doble tracción. Han construido para sus pueblos plantas eléctricas movidas por generadores de gasolina. Son las Farc las que se han convertido en sus gobernantes, proporcionando servicios públicos tales como seguridad, ayuda social, un sistema de justicia entre otros” (Leech, 2006b).

proporciona una sensación de seguridad y en su interior pueden emprenderse proyectos alternativos de desarrollo basados en un apoyo comunitario en un entorno de paz (Leech, 2002c, 78. Ver también Villalón, 2004, 34-35). En los años que siguieron fue evidente un crecimiento dramático de la población rural que arribaba al territorio desmilitarizado de las Farc-EP. Previo a las negociaciones de paz, la zona “era un territorio de 100.000 habitantes” (Chernick, 200, 36 y Hodgson, 1999). De ese entonces, hasta cuando el gobierno colombiano del presidente Andrés Pastrana invadió con tropas la región y dio por terminadas las negociaciones de paz, habían inmigrado cerca de 740.000 nuevos residentes a la zona, en la que hasta la ruptura del diálogo, se asentaban combatientes de las Farc-EP (Wilson, 2003).

En regiones donde la insurgencia ejerce su hegemonía, las Farc-EP han construido sistemas “para proveer servicios sociales que de otra manera no existirían en los territorios bajo su dominio militar” (Felbab-Brown, 2005, 110). Allí, en estos territorios, la guerrilla pone a disposición de los campesinos clínicas y distribución de medicamentos completamente gratis, servicios educativos y de infraestructura (vías, servicios de transporte público, arrogación, electricidad gratuita para los residente, etc.), un sistema alterno de justicia basado en los principios de una organización comunitaria, protección al medio ambiente (caza, pesca, aserríos etc.), reglamentación de jornadas de trabajo justas, regulación a la prostitución (chequeos médicos periódicos y abolición de los llamados “machucantes”, esto es los hombres que se lucran de la “protección” que dicen ofrecer a las prostitutas) al igual que ofrecen ayuda económica para la intercomunicación compartida por la comunidad (tal como agro producción y la colocación de excedentes de programas de comercio) (ibíd. Ver también. Molano, 2005, 32; Taussig, 2004b, 142 y Villalón, 2004, 34-35).

Muchos de los hogares que moran en la región tienen al menos uno de sus miembros en las Farc y los residentes se entrecruzan libre y espontáneamente con las mujeres y hombres rebeldes de camuflado a la usanza de los ciudadanos rurales del norte con los funcionarios del gobierno de su entorno y con representantes de la ley. Un campesino lo explica así: “Cuando alguien de por aquí tiene un problema con otra persona, por ejemplo una pelea o algo

parecido, ambos pueden quejarse a las Farc. Las Farc proceden a investigar, dictaminan de quien es la culpa y pronuncian sentencia”. Y añade que las Farc no tienen prisiones y que las penas consisten, por lo común, en que el culpable se vea forzado a trabajar en la reparación de carreteras o caminos o a faenar en las tierras comunales (Leech, 2006b).

De estas labores de apoyo social brota un sentimiento de alianza entre la población rural y las Farc-EP, que hunde sus raíces en la inmemorial y arcana apatía del Estado con los pobres. En este mundo los labriegos interpretan su relación con la guerrilla como una unión sociopolítica, económica y cultural para la sobrevivencia de la comunidad, una comunidad para ellos ligada e íntimamente conectada a las Farc-EP.

“Con el rotundo fracaso del gobierno en suministrar los servicios básicos a la población local, son las FARC quienes llenan el vacío ayudando a construir vías, proporcionando electricidad, aplicando la ley como jueces y proveyendo otros servicios formalmente a cargo del Estado. Tal como lo dijo una campesina de la región: ‘Cuando los finqueros o sus familias se enferman y no pueden costear los remedios, las FARC son las que ponen la plata para comprarlos’.... Hasta que el gobierno ofrezca a campesinos como Cecilia algo más que la mera represión militar, la población local, en comarcas como La Macarena, continuarán viendo su bienestar y su sobrevivencia indisolublemente ligados a la suerte de las FARC. Por todo ello, la violencia continuará haciendo estragos en otro de los tesoros de la nación: su gente” (ibíd.).

Como resultado directo de las políticas económicas y militares de Estado de E.U.A./Colombia, en las áreas urbanas y rurales de Colombia ha ocurrido un viraje. Este viraje comporta un apoyo mayor en el campo a las Farc-EP, una creciente influencia de la clase trabajadora en su oposición al Estado y la escueta protesta de los propios aliados de Uribe por las tensiones económicas. Virajes como este develan la fragilidad presente y futura de Uribe en el contexto interno. Y de contera, otros factores externos a Colombia han trazado restricciones adicionales en los recursos disponibles a los que su gobierno puede recurrir para sostener el Estado colombiano.

Entre una roca y un sitio inhóspito: las realidades de los mercados globales contemporáneos.

Es bastante notoria la gran oposición a la reforma de impuestos de Uribe en diversos sectores de la sociedad colombiana: la elite y la clase trabajadora, la población rural, los partidos de oposición y en el mismo gobierno. Más sorprendentes aún son los informes que han aparecido originados por los propios congresistas aliados de Uribe, describiendo su oposición creciente a las políticas de reforma fiscal. En cierta ocasión testimoniaron que el mismo Presidente había cambiado después y subrepticamente articulados mutuamente acordados para la reforma del IVA previo a su reelección para el segundo período (Martínez, 2006). En el otoño de 2006, Bronstein publicó un escrito insinuando que la acusación muestra a Uribe también “afrontando una revuelta entre sus propios aliados en el Congreso, que se rehúsan a votar un aumento en los impuestos.” (Bronstein, 2006b). No es difícil deducir que estas conductas no apuntan a que Uribe pueda mantener el poder en Colombia.

A tiempo que repunta el cuestionamiento de las organizaciones de la izquierda tradicional¹⁷ y el apoyo interno de sus aliados políticos parece asordinado, el Presidente ha tenido que centrarse, mucho más que antaño, en procurar recursos financieros para mantener las turbulencias revolucionarias apartadas de la capital. Uribe no ha logrado suavizar las presiones fiscales que soportan sus autodeclarados aliados de la clase dominante; sin embargo, y en previsión a una posible oposición ulterior de la elite, se ha rebuscado en el extranjero fuentes adicionales para el combate con las Farc-EP. Mientras lucha para implementar la reforma del IVA, Uribe apela a instituciones foráneas para que preserven el flujo de fondos que destinan a la guerra colombiana. Los párrafos siguientes versan sobre dos de estas fuentes de financiamiento externo

¹⁷ En las elecciones del 2006, en las que las Farc-EP estimularon a la gente a participar, el resultado del candidato de la izquierda *Polo Democrático Alternativo* Carlos Gaviria Díaz fue 23% del total de la votación (Abad, 2006). Con ello sobrepasó el 16% logrado por Luis Eduardo Garzón del centro izquierda (*Polo Democrático Independiente*) en las elecciones presidenciales anteriores del 2002. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2002).

y concluyen afirmando que la dependencia de fuentes externas no resulta sostenible hacia adelante y solamente acelera la inevitable caída de la actual economía política del gobierno.

La realidad de su política económica ha situado a Uribe en una situación comprometedor. El Presidente presencia una rebelión silenciosa dentro de la clase dominante acompasada con la de los trabajadores urbanos y la de los campesinos ubicados en la periferia. Adicionalmente la guerra civil, que Uribe pronosticase concluiría en el 2006, continúa y en muchas regiones se ha ido tornando en favor de las Farc-EP. En tales circunstancias, Uribe no puede apoyarse en una elite a la que ha sobrecargado de tributos para sostener su poder. En consecuencia, “para financiar la guerra, la administración Uribe está manejando un déficit presupuestario del 6% del PIB, un porcentaje por encima del tope de 2,5% establecido por el FMI (el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas en español)” (Richani, 2005b, 89). Uribe ha llegado a esta cifra, así como a la reducción del 7% del impuesto a la renta que corresponde a la elite, como herramientas para reducir la presión fiscal a la población afluente de Colombia. Como se ha acotado anteriormente, tal medida poco ha morigerado la creciente oposición a su intención de ampliar la reforma de impuestos. Para amortiguar las fricciones internas, la única opción posible de Uribe es el endeudamiento del país y así preservar la estabilidad económica y política de Colombia, como lo han hecho muchos países latinoamericanos en el pasado. Irónicamente, aunque tal situación es el resultado de su propia plataforma neoliberal que persigue debilitar cada vez más el gasto público, Uribe ha situado al tesoro colombiano en situación de déficit para poder combatir a las Farc-EP. Es bien claro que tal posición no es sostenible y al estudiarla con la retrospectiva de los últimos treinta años, algunos funcionarios del FMI han recomendado que se disminuya su apoyo a Colombia en previsión a que la carga de la deuda pública se torne problemática en el futuro (Muse, 2004, 22-23).

Los factores arriba mencionados potencialmente podrían conducir a una inestabilidad doméstica, por hallarse Uribe entre la espada (FMI) y la pared (una creciente oposición a su reforma a los impuestos y la explotación

bilateral). De acuerdo con Richani (2005b, 89-90, 101. Ver también Richani, 2005a, 115), la elite social y los grupos económicos más influyentes¹⁸ “se están revelando contra el pago de más impuestos, de ahí la presión creciente a Uribe para que recurra a las reservas estatales de moneda extranjera para financiar la guerra.” (Richani, 2005b, 90). Esta concepción ha sido objeto de cabildo y de respaldo por parte de la elite porque los aportes e intervención de los Estados Unidos: 1) ayudan al Estado a combatir a las Farc-EP, una amenaza evidente para los intereses de la clase dominante y 2) reduce el esfuerzo fiscal de la elite colombiana transfiriendo parte de la carga de los gastos militares a los hombros del contribuyente estadounidense (ibíd.). Sin embargo, durante el tiempo en que los EE-UU. han proporcionado su ayuda, han estado fuertemente involucrados política y militarmente en sus propias campañas geopolíticas y en consecuencia el incremento del gasto militar en Colombia no es muy factible que se constituya en una de sus prioridades presupuestales. (Petras y Veltmeyer, 2003). El debilitamiento del apoyo de E.U.A. a Colombia, como ya se dijo en varias oportunidades, es posible evidenciarlo en la decisión de la Usaid (la agencia de ayuda internacional del gobierno norteamericano) y de la administración Bush de suspender la ayuda a la región sociopolítica más importante en el país, en razón a su incapacidad para mantener el territorio a cubierto de las acciones de las Farc-EP. Por lo demás, el mismo Estados Unidos está muy preocupado por las continuas acciones bélicas en Afganistán e Irak y con la posibilidad, no necesariamente remota, de encontrarse abocado a desplegar por igual sus fuerzas militares hacia Irán. Combinado con estas circunstancias internacionales que le condicionan, los Estados Unidos sufren una disminución de su capacidad política y económica para intervenir brevemente en las acciones en Colombia (Richani, 2005b, 90). Restringido por estas limitantes reales, fiscales y políticas, Uribe encuentra menos alternativas para sustentar el financiamiento del Estado. Su administración ha sobrepasado los porcentajes tolerables para el FMI del déficit fiscal como fracción del ingreso

¹⁸. Una definición de los grupos económicos colombianos es “conglomerados unidos por medio de cuerpos directivos, compañías de ‘holding’, con financiación cruzada entre las empresas que constituyen el ‘holding’ y por medio de propiedad familiar compartida.” (Avilés, 2006, 151). El más promisorio es el Sindicato Antioqueño, el grupo Ardila Lule, el grupo Santodomingo y el grupo Sarmiento. (ibíd. 77-78).

nacional y su principal aliado, la administración Bush, está confinado cada vez más por los dilemas propios de su extralimitación imperial (ibíd.).

Es en realidad paradójico pero explicable, que a pesar de todos los esfuerzos de los E.U.A. y del Estado colombiano para combinar sus fuerzas en el propósito de vencer a las Farc-EP, lo que en efecto haya ocurrido sea exactamente lo opuesto. En los últimos años se ha podido apreciar muchas veces que las Farc-EP distan mucho de ser derrotadas. Richani subraya que “habida consideración de la estructura militar actual y de la limitada capacidad fiscal del Estado colombiano, no será posible edificar la necesaria organización militar para contrarrestar las insurgencia. Preocupados por su propio déficit público y abocados a la espiral de costos para el erario en que se ha convertido su aventura en Irak, así como por el financiamiento de los programas de reconstrucción de Afganistán, los E.U.A. claramente no están en posición de sobrellevar más esa carga... La intervención de E.U.A. no ha sido lo suficientemente decisiva para permitirles a los militares colombianos vencer a la guerrilla. Cinco años después de adoptado el Plan Colombia en el horizonte no se vislumbra una victoria y las fuerzas de la guerrilla no dan muestras de un debilitamiento notorio” (ibíd.).

Debido a la adopción y ejecución de políticas neoliberales, existe una inconsistencia protuberante en lo que atañe a la capacidad del Estado colombiano para confrontar a las Farc-EP. Empero, Richani sostiene que las corporaciones multinacionales (MNCs, por sus siglas en inglés) pueden beneficiarse de la creciente brecha en la capacidad de Uribe para procurarse “ingresos extras para sostener su guerra contra la creciente insurgencia armada” (Richani, 2005a, 115)¹⁹. Las organizaciones de seguridad privada han captado la oportunidad para capitalizar a partir de la dicotomía neoliberal de estabilizar,

¹⁹. Existe un argumento que distorsiona los márgenes de inversión extranjera directa durante 1990 como resultado de la búsqueda de MNC por buscar “concesiones potenciales favorables” como consecuente ganancia de la Guerra.

“El sentido común sugiere que un ambiente de guerra va en detrimento de la inversión de capital, especialmente de capital extranjero. Pero la evidencia en el caso colombiano reta ese sentido común. Durante 1990, la inversión extranjera en Colombia creció en promedio 55%, por encima del promedio de crecimiento en los ochentas... la inversión realizada

por no mencionar preservar, los intereses corporativos (tanto los económicos como los políticos) en Colombia. Con la combinación de las fuerzas de E.U.A. y Colombia contra las Farc-EP fracasando permanentemente o mostrándose incapaces de diezmar a la guerrilla, han surgido en todos los sectores del país en los últimos años las fuerzas privadas de seguridad (referidas bajo el nombre genérico de paramilitares. N. de T.) (O’Shaughnessy and Branford, 2005, 115, 128-130). Sin embargo, son evidentes complejos problemas que pueden desencadenarse al utilizar tales fuerzas. Un punto importante que merece ser expresado en relación al argumento, es que las fuerzas privadas de seguridad (paramilitares) mantendrán sus actividades de contrainsurgencia en tanto que ello resulte rentable desde una perspectiva fiscal, pero es allí en donde se originan los problemas. Entre más el Estado colombiano reduzca el excedente económico que percibe durante estos años por la venta de empresas y servicios que tradicionalmente han sido propiedad pública, a la par que reduce los impuestos a los grandes inversionistas extranjeros, mayor será la presión monetaria para verse forzado a mantener estas fuerzas de seguridad

durante los noventa, cuando los índices de criminalidad y de violencia, eran mas altos que los establecidos para los ochentas (Richani, 2005a, 115).

Tal premisa sin embargo da poca credibilidad al aumento del FDI durante los noventas, fundamentado en la apertura económica neoliberal o apertura de la economía colombiana durante este periodo, la cual eliminó durante la década, las políticas proteccionistas que restringían la extracción extranjera y las tarifas del Estado.

“Los altos niveles del Inversión Extranjera directa a Colombia en los noventas fueron consecuencia de la apertura Económica de la economía en 1990, más que en condiciones específicas relacionadas al conflicto. El la inversión extranjera directa fue más alta que en los ochentas debido a que Colombia mantuvo una economía proteccionista comparada a otros países Latinoamericanos, quienes estaban ya aplicando políticas Neoliberales. Yo establecería que Colombia no abrió su economía con el fin de aumentar su presupuesto para la guerra, sino como consecuencia del clima global de la economía y de las presiones internacionales correspondientes en particular las de Estados Unidos, que forzaba a otros países abrir la economía y no estaban en guerra” (Correspondencia personal entre Leech y el autor, 10 de diciembre de 2005).

Mientras Richani eludía tal premisa, se prescribe crédito excesivo al Corporaciones Multinacionales (MNC por sus siglas en ingles) fortaleza que aceleró la guerra civil sin prestar mucha atención al consenso de Washington ni a las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno colombiano durante los últimos quince años. (Richani, 2005a, 117-118).

privada (paramilitares). En la necesidad de lograr un acopio de capital, para reinvertirlo en fuerzas privadas de seguridad (mediante una reducción cada vez más marcada de los gastos del gobierno dentro de los cánones y dogmas de la economía neoliberal) como consecuencia se activa un incremento en la expansión de las relaciones sociales de producción. Incrementar la expansión de las relaciones sociales de producción, como ya se señaló, acarrea una mayor explotación/extracción de los llamados recursos naturales de que dispone el país y conduce por esta vía a una degradación del medio ambiente –como se puede entrever en los principios que guían la negociación del gobierno del Tratado de Libre Comercio y en los que subyacen en la legislación sobre el Impuesto al Valor Agregado. Como se ha dicho ya, la expansión solo aumentará el descontento social entre las masas llevando a 1) un mayor apoyo a los grupos revolucionarios insurgentes y 2) a toparse con los límites propios de tal proceso, por las características finitas de las realidades humanas y ambientales y por las restricciones de la capacidad del capital excedente para patrocinar y financiar fuerzas de seguridad privada guiadas por el afán de lucro. Sobre la base de múltiples restricciones geopolíticas y de índole económica, el Estado no puede mantener el uso de las fuerzas privadas de seguridad, y así mismo, en razón al agotamiento de las fuentes para el financiamiento del Estado y de los recursos disponibles, tampoco pueden las marchitadas fuerzas internas de coerción enfrentarse al reforzado apoyo y embate de las Farc-EP, resultado natural de la creciente represión sociopolítica y de la marginalidad económica.

Conclusión

Debido a la actual guerra civil colombiana que transcurre aparejada con una implementación de políticas económicas de desarrollo neoliberales, este ensayo arguye que la administración Uribe podría resultar incapaz de sostener el gobierno como consecuencia de una vacilante economía política y un descontento social. Con el Estado colombiano afrontando la aguda oposición de varios sectores de la sociedad civil, en condiciones de un creciente gasto deficitario que sobrepasa los topes sugeridos por el FMI y catalizado por el

progresivo retiro de la ayuda de E.U.A. –porque el imperialismo se halla hoy extendido más allá de sus capacidades– existe una crisis potencial y se vislumbra la posibilidad de un Uribe que no logra preservar su poder y aun la estructura del sistema político tradicional de Colombia (Xinhua, 2006; Morales, 2005; Golf, 2004 y Stewart, 2004).

Bibliografía

Abad, Susan, 2006, “The Left’s Loss is a Win”, July 13, disponible en <http://www.lapress.org/article.asp?IssCode=&lanCode=1&artCode=4756>, consultada el 3 de agosto de 2006.

Acosta, Luís Jaime, 2004, “Victory years away in Colombia jungle offensive”, September 7, disponible en http://www.alertnet.org/printable.htm?URL=/the_news/newsdesk/N07583583.htm, consultado el 17 de septiembre de 2004.

Ahmad, Aijaz, 2006, “Colombia’s Lethal Concoction”, en *Frontline*, número 6.

Alexander, Robert J., *Communism in Latin America*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1957.

Anncol, 2004, “Llegó Bush a Colombia en medio de fuertes protestas por su visita”, 22 de noviembre, disponible en <http://www.anncol.org/side/984>, consultada el 23 de noviembre de 2004.

Associated Press, 2006, “Bomb at University in Colombia Wounds 23”, October 19, disponible en <http://www.chron.com/disp/story.mpl/world/4274471.html>, consultada el 20 de octubre de 2006.

Avilés, William, 2006, *Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in Colombia*, New York, Suny.

Bland, Daniel, 2004, "Democratic Security in Colombia: At What Cost?", en *Focal Point: Spotlight on the Americas*, número 8.

Brittain, James J. y Sacouman, Robert J., 2006, *Colombia's Internal Conflict: A period of discontinuity or prolonged revolution?*, Paper presentation delivered in Calgary, Alberta for the Canadian Association of Latin American and Caribbean Studies Conference at the University of Calgary, September 30.

Bronstein, Hugh, 2006a, "Colombia proposes lower income tax, wider VAT", July 28, disponible en http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?type=bondsNews&storyID=2006-07-28T180018Z_01_N28351504_RTRIDST_0_ECONOMY-COLOMBIA-REFORMS-UPDATE-1.XML, consultada el 31 de julio de 2006.

—, 2006b, "Colombia's tax reform will bogged down in politics", September 26, disponible en http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?type=bondsNews&storyID=2006-09-26T154702Z_01_N26218419_RTRIDST_0_ECONOMY-COLOMBIA-REFORMS.XML, consultada el 26 de septiembre de 2006.

Bloomberg, 2005, "Colombia Seeks to Reduce Dependence on U.S. Aid Within 2 Years", Febrero 23, disponible en http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000086&sid=aOf0r7CCbXQg&refer=latin_america, consultada el 23 de febrero de 2005

—, 2006, "Colombia Coca Growers Find Quitting Hard Amid Anti-Drug Assault" February 3, disponible en http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000086&sid=aNK5nuwu0Mxg&refer=news_index, consultada el 3 febrero de 2006.

Bureau of Western Hemisphere Affairs, 2005, "Background Note: Colombia", February, disponible en <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35754.htm>, consultada el 11 de febrero de 2005;

Cislac, 2001, *Colombia: Peace at What Price?* Documentary film, Director Anne O'Casey.

CNN International, 2006, "General may have been target of Colombian blast", October 19, disponible en <http://edition.cnn.com/2006/WORLD/americas/10/19/colombia.bomb.ap/>, consultada el 20 de octubre de 2006.

Coghlan, Nicholas, 2004, *The Saddest Country: On Assignment in Colombia*, Montreal, McGill-Queen's University Press.

Committee of Government Reform, 2004, "Andean Counterdrug Initiative Backgrounder", October 13, disponible en <http://reform.house.gov/CJDPHR/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=6040>, consultada el 11 de febrero de 2005.

Comisión Colombiana de Juristas, 2004, *En contravía de las recomendaciones internacionales. ¿Seguridad Democrática?, derechos humanos y derecho humanitario en Colombia: agosto de 2002 a agosto de 2004*, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas.

Contraloría General de la República, 2004, *Evaluación de la Política Social 2003*, Bogotá, Contraloría General de la República.

Crandall, Russell, 2005, "From Drugs to Security: A New U.S. Policy Toward Colombia" en Crandall, Russell; Paz, Guadalupe y Roett, Riordan, editors, *The Andes in Focus: Security, Democracy & Economic Reform*, Boulder, Lynne Rienner.

Crawley, Vince, 2005, "SouthCom Chief Claims Progress in Colombia", March 22, disponible en <http://www.airforcetimes.com/story.php?f=0-AIRPAPER-728235.php>, consultada el 23 de marzo de 2005.

Chernick, Marc, 2000, "Elusive Peace: Struggling against the logic of violence", en *Nacla Report on the Americas*, número 2.

Daily Journal, 2006, "Uribe Proposes Tax to Finance Army", March 29, disponible en <http://www.thedailyjournalonline.com/article.asp?ArticleId=233303&CategoryId=12393>, consultado el 30 de marzo de 2006.

Dale Scott, Peter, 2003, *Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Colombia, and Indochina*, Boulder, Rowman & Littlefield Publishers.

Díaz-Callejas, Apolinar, 2005, "La 'Seguridad Democrática' se hunde", abril 27, disponible en <http://www.anncol.org/side/1315>, consultada el 29 de abril de 2005.

Díaz Montes, Eberto, 2005, "Organic Class-Consciousness in Rural Colombia", International Development Studies Special Lecture Series for the Department of Political Science at University of New Brunswick, November 21.

Dudley, Steven, 2004, *Walking Ghosts: Murder and guerrilla politics in Colombia*, New York, Routledge.

Federal Research Division Library of Congress, 1988, "Colombia: Military Expenditure", disponible en [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+co0150\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+co0150)), consultada el 2 de noviembre de 2006.

Felbab-Brown, Vanda, 2005, "The Coca Connection: Conflict and Drugs in Colombia and Peru", en *Journal of Conflict Studies*, número 2.

Fundación Seguridad y Democracia, 2004, "El repliegue de las FARC: ¿derrota o estrategia?", en *Coyuntura de Seguridad*, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, julio-septiembre.

_____, 2006, *Balance de Seguridad 2005*, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia.

Garamore, Jim, 2005, "U.S., Colombia Will Continue Pressure on Narcoterrorists", April 12, disponible en http://www.defenselink.mil/news/Apr2005/20050412_563.html, consultada el 13 de abril de 2005;

Gerassi, John, 1965, *The Great Fear in Latin America*, London, Collier-MacMillan Ltda.

Gibbs, Terry y Leech, Garry M., 2005, "Race and Class Dimensions of the War on Drugs: A Humanitarian Crisis", en *Rutgers University Journal of Law and Urban Policy*, número 1, pp. 62-74.

Giraldo, Javier, 1996, *Colombia: The Genocidal Democracy*, Monroe, Common Courage Press.

Goff, Stan, 2004, *Full Spectrum Disorder: The Military in the New American Century*, New York, Soft Skull Press.

Goodman, Joshua, 2006a, "Trade Deal Threatens the War on Drugs", April 26, disponible en <http://www.chron.com/disp/story.mpl/ap/fn/3820387.html>, consultado el 26 de julio de 2006

_____, 2006b, "U.S. Cuts Aid for Colombia Area", October 11, disponible en http://news.yahoo.com/s/ap/20061011/ap_on_re_la_am_ca/colombia_us_aid_cuts_2;_ylt=AjS8YTAxz3.7XWKf12l5leSwv7kA;_ylu=X3oDMTBiMW04NW9mBHNIYwMlJVRPUCUI, consultada el 13 de octubre de 2006;

Gorman, Peter, 2002, "Marines Ordered into Colombia: February 2003 is Target Date" October 25, disponible en <http://www.narconews.com/article.php3?ArticleID=19>, consultada el 22 de noviembre de 2004

Helweg-Larson, Simon, 2002, "Uribe's Dictatorial Rule Suits Oil Companies", October 21, disponible en <http://colombiajournal.org/colombia136.htm>, consultada el 8 de marzo de 2006.

Hodgson, Martin, 1999, "Colombian Rebels Impose Law of the Gun: Some villagers support actions in demilitarized zone, but officials say they are illegal and may elicit revenge when army return" en *Globe and Mail*, July 19, p. A15.

Holmes, Jennifer S.; Gutiérrez de Piñeres, Sheila Amin y Curtin, Kevin M., 2006, "Drugs, Violence, and Development in Colombia: A Departmental-Level Analysis", en *Latin American Politics & Society*, número 3.

Klare, Michael, 2001, *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*, New York, Metropolitan Books.

Korzeniewicz, Roberto Patricio y Smith, William C., 2000, "Poverty, Inequality, and Growth in Latin America: Searching for the High Road to Globalization", en *Latin American Research Review*, número 3.

Latin American Press, 2004, "How Much the War Costs", Noviembre 25, disponible en <http://www.lapress.org/ArticlePrint.asp?IssCode=0&lanCode=1&artCode=4033>, consultada el 26 de noviembre de 2004.

Lee Fluharty, Veron, 1957, *Dance of the Millions: Military rule and social revolution in Colombia 1930-1956*, Pittsburg, University of Pittsburg Press.

Leech, Garry M., 2002a, "Colombia Court Declares Rehabilitation Zones Unconstitutional", December 9, disponible en <http://colombiajournal.org/colombia143.htm>, consultada el 8 de marzo de 2006.

_____, 2002b, "The Spy Game", July 22, disponible en <http://colombiajournal.org/colombia123.htm>, consultada el 8 de marzo de 2006.

_____, 2002c, *Killing Peace: Colombia's Conflict and the Failure of U.S. Intervention*, New York, Information Network of the Americas.

_____, 2004a, *The War on Terror in Colombia*, New York, Colombia Journal.

_____, 2004b, "Plan Petroleum in Colombia", en *Canadian Dimension*, número 4.

_____, 2005, "Oil and Plan Colombia", Oral Presentation for Amnesty International, February 27, Hampton, New Brunswick.

_____, 2006a, *Crude Interventions: The United States, oil and the new world (dis)order*, London, Books.

_____, 2006b, "Waging War in Colombia's National Parks", September 3, disponible en <http://www.colombiajournal.org/colombia242.htm>, consultada el 4 de septiembre de 2006.

_____, 2006c "Uribe's New Economic Reforms Benefit Corporations, Not Colombians", July 31, disponible en <http://colombiajournal.org/colombia241.htm>, consultado el 31 de Julio de 2006.

Lemus Ramírez, María; Stanton, Kimberly y Walsh, John, 2005, "Colombia: A Vicious Circle of Drugs and War", en Youngers, Coletta A. y Rosin, Eileen, editors, *Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy*, Boulder, Lynne Rienner.

Livingstone, Grace, 2003, *Inside Colombia: Drugs, Democracy and War*, London, Latin American Bureau.

Martínez, Helda, 2006, "Colombia: More Taxes on the Poorest", July 19, disponible en <http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=34029>, consultado el 31 de julio de 2006.

Molano, Alfredo, 2005, *The Dispossessed: Chronicles of the desterrados of Colombia*, Chicago, Haymarket Books.

Mondragón, Héctor, 2007, "Democracy and Plan Colombia" en *Nalca Report on the Americas*, número 1.

Morales, Luís, 2005, "Colombia on the Brink", September 8, disponible en <http://www.baltimoresun.com/news/opinion/oped/balop.colombia08sep08,1,5877873.story?coll=bal-oped-headlines&ctrack=1&cset=true>, consultada el 24 de septiembre, 2005.

Murillo, Mario A., y Rey, Avirama Jesús, 2004, *Colombia and the United States: War, Unrest and Destabilization*, New York, Seven Stories Press.

Muse, Toby, 2004, "Paying the Piper: Swamped with Debt and Fighting a War, Colombia's Uribe Feel the Heat Inside and Out", en *Latin Trade*, número 1.

O'Shaughnessy, Hugh y Branford, Sue, 2005, *Chemical Warfare in Colombia: The Costs of Coca Fumigation*, London, Latin American Bureau.

Peceny, Mark y Durnan, Michael, 2006, "The Farc's Best Friend: U.S. Antidrug Policies and the Deepening of Colombia's Civil War in the 1990s", en *Latin American Politics & Society*, número 2.

People's Daily, 2006, "Colombian government plans temporary tax to raise money for military", July 7, despoiled en http://english.people.com.cn/200607/07/eng20060707_280962.html, consultada el 8 de Julio de 2006.

Petras, James y Brescia, Michael M., 2000, "The Farc Faces the Empire", en *Latin American Perspectivas*, número 5.

Petras, James y Veltmeyer, Henry, 2003, *System in Crisis: The Dynamics of Free Market Capitalism*, Halifax, Fernwood Publishing.

Prensa Latina, 2006, "Colombia Slashes FTA Victims Aid", April 25, disponible en <http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7B218171C1-50E7-4073-A019-39A644FC0AC6%7D&language=EN>, consultada el 27 de abril de 2006.

Ramírez Cuellar, Francisco, 2005, *The Profits of Extermination: How U.S. Corporate Power is Destroying Colombia*, Monroe, Common Courage.

Randall, Stephen, 2002, "Colombia: Can Democracy Save this Troubled Nation?" en *The Calgary Herald*, May 23, p. 23A.

Registraduría Nacional del Estado Civil, 2002, "Votación a Nivel Nacional" Junio 7, disponible en <http://www.registraduria.gov.co/2002PRP1/evpresidente0.htm?1>, consultada el 8 agosto de 2006.

Renner, Michael, 2002, *The Anatomy of Resource Wars*, Washington, DC, Worldwatch Institute.

Reuters, 2006a, "Colombia's Uribe Wants Assets Tax to Fund Military", March 29, disponible en http://today.reuters.com/investing/financeArticle.aspx?type=bondsNews&storyID=2006-03-29T175122Z_01_N29333924_RTRIDST_0_ECONOMY-COLOMBIA-ELECTION.XML, consultado el 30 de marzo de 2006.

—, 2006b, "US embassy warns of possible Colombia rebel attack", September 22, disponible en <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N22199469.htm> consultada el 22 de septiembre de 2006.

Richani, Nazih, 2002, *Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia*, New York, Suny Press.

—, 2005a, "Multinational Corporations, Rentier Capitalism, and the War System in Colombia", en *Latin American Politics and Society*, número 3.

—, 2005b, "Third Parties, War Systems Inertia, and Conflict Termination: The Doomed Peace Process in Colombia, 1998-2002" en *Journal of Conflict Studies*, número 2.

Restrepo, Jorge y Spagat, 2004, Michael, *The Colombian Conflict: Uribe's First 17 Months*, Cepr, Discussion Paper, número 4570.

Ruiz, Bert, 2001, *The Colombian Civil War*, Jefferson, McFarland & Company Publishers.

Sipri Military Expenditure Database, 2005, "Colombia", February 10, disponible en http://first.sipri.org/non_first/result_milex.php?send, consultada el 10 de febrero de 2005

Steinberg, Michael K., 2000, "Generals, Guerrillas, Drugs, and Third World War-Making" en *Geographical Review*, número 2.

Stewart, Phil, 2004, "Colombia Wants More U.S. Aid to Fight Drugs, Rebels", April 1, disponible en <http://www.reuters.com/printerFriendlyPopup.jhtml?type=worldNews&storyID=4728628>, consultada el 2 de abril de 2004.

Sweig, Julia E. y McCarthy, Michael M, 2005, "Colombia: Starving Of Partial Collapse", en Crandall, Russell; Paz, Guadalupe y Roett, Riordan, editores, *The Andes in Focus: Security, Democracy & Economic Reform*, Boulder, Lynne Rienner.

Taussig, Michael, 2004a, *Law in a Lawless Land: Diary of Limpieza in Colombia*, New York, The New Press.

_____, 2004b, *My Cocaine Museum*, Chicago, The University of Chicago Press.

Toro, Juan Pablo, 2004, "Colombia Say's It's Winning Vs. Rebels", November 11, disponible en <http://www.kansascity.com/mld/kansascity/news/10156999.htm>, consultada el 11 de noviembre de 2004.

United Nations Development Programme (Undp), 2003, *El Conflicto - Callejón con Salida: Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, 2003*, Bogotá, Undp.

_____, 2004, "Tale of Two Towns in Colombia: Bloody Political Conflict Yields to Joint Development", December, disponible en <http://www.undp.org/dpa/choices/2004/dec/colombia.html>, consultada el 6 de noviembre de 2005.

United States Embassy of Colombia, 2003, "Democratic Security and Defense Policy", disponible en <http://www.colombiaemb.org/opencms/opencms/defense/>, consultada el 6 de noviembre de 2005.

Vieira, Constanza, 2006, "Colombia: Conflict to Heat Up Ahead of Elections, Says Analyst" January 16, disponible en <http://ipsnews.net/print.asp?idnews=31716>, consultada el 15 de marzo de 2006.

Villalón, Carlos, 2004, "Cocaine Country", en *National Geographic*, July.

Washington Office on Latin America, *Colombia Besieged: Political Violence and State Responsibility*, Washington, Wola, 1989. Michael Taussig, *My Cocaine Museum*. (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2004b), p. 142;

Williams, Mark Eric, 2005, "U.S. Policy in the Andes: Commitments and Commitment Traps" en Crandall, Russell; Paz, Guadalupe y Roett, Riordan, editores, *The Andes in Focus: Security, Democracy & Economic Reform*, Boulder, Lynne Rienner.

Wilson, Scott, 2003, "Colombia's Rebel Zone: World Apart", en *Washington Post*, October 18, p. A01.

World Bank, *Colombia Poverty Report: Volume 1*, 2002, Bogotá/Washington, Colombia Country Management Unit/Prem Sector Management Unit Latin American and the Caribbean Region, World Bank.

Xinhua, 2006, "Colombia says Farc Rebels Operating in Bolivia, Paraguay", June 23, disponible en http://english.people.com.cn/200606/23/eng20060623_276640.html, consultada el 23 de junio de 2006.